

# Editorial

## La negociación y las posibilidades de la paz

*Hemos entrado en el onceavo año de guerra y, aparentemente, la paz aún no llega. La confidencialidad que ha caracterizado las conversaciones desde octubre de 1990 da la impresión que no hay avances y que la paz sigue estando lejos. Más aún, los pesimistas afirman que las negociaciones no llevarán a ninguna parte. Sin embargo, la paz negociada aún tiene buenas posibilidades y pese a las apariencias, en 1990 se produjeron avances importantes, aunque no los suficientes como para acortar la guerra.*

*A lo largo del año, el gobierno y el FMLN firmaron tres acuerdos, el primero de ellos, en Ginebra, sobre el contexto de las negociaciones, el 4 de abril; el segundo, en Caracas, sobre la agenda y el calendario del proceso de negociación, el 21 de mayo; y el tercero, en San José, sobre derechos humanos, el 26 de octubre, por el cual las partes adquirieron compromisos detallados para garantizar el respeto irrestricto de dichos derechos y aceptaron el establecimiento de una misión de verificación de las Naciones Unidas. Asimismo hubo varias reuniones directas entre los representantes del gobierno y del FMLN, con la participación del representante personal del secretario general de las Naciones Unidas, quien, además, ha viajado con frecuencia para reunirse con el presidente Cristiani y con la comandancia del FMLN por separado; en numerosas ocasiones, el representante ha estado con los dirigentes y representantes de una amplia gama de partidos políticos, organizaciones sociales y dirigentes religiosos.*

*De hecho, en la opinión pública nacional, el diálogo y la negociación han estado muy presentes; más aún, los principales problemas de El Salvador ahora se discuten en el contexto de dicho proceso. Por todo ello, la paz aún tiene buenas posibilidades abiertas que no hay que olvidar, aunque también todavía debe superar grandes obstáculos para ser una realidad firme.*

## **1. Los principales resultados del proceso de diálogo-negociación**

*Haber colocado el proceso de diálogo-negociación bajo los auspicios de las Naciones Unidas ha sido un factor sumamente importante, porque ello ha dado al proceso mayores garantías de continuidad que las que tuvo en el pasado. La mediación del representante personal del secretario general ha sido profesional y especializada. En este sentido se ha ganado mucho al no haber tomado en cuenta a los obispos de San Salvador, pues no es lo suyo mediar directamente en un proceso complejo y delicado con graves implicaciones políticas y diplomáticas. El mediador de las Naciones Unidas, en cambio, es asistido, cuando así lo requiere, por expertos en diversas materias relevantes para el proceso y dialoga con los gobiernos interesados en la solución negociada del conflicto salvadoreño, en especial con Estados Unidos.*

*Además del cambio de mediador, hubo otra novedad muy importante en el procedimiento de mediación, el cual fue modificado sustancialmente. El cambio de procedimiento se produjo cuando las conversaciones se estancaron y los esquemas usados hasta entonces pusieron en peligro su continuidad. Este cambio del rol del mediador y del procedimiento de mediación ha resultado también muy positivo en orden a mantener abiertos los canales del diálogo, pese a las dificultades intrínsecas del proceso.*

*Ahora los encuentros oficiales de las dos delegaciones sólo se llevan a cabo cuando han sido suficientemente preparados y hay algunos acuerdos iniciales conseguidos. Para esto, el mediador viaja constantemente, llevando y trayendo propuestas y contrapropuestas. De esta manera, presenta y discute por separado con la dirigencia del FMLN y con el presidente Cristiani y su ministro de defensa. Esta modalidad menos pública ha dado más agilidad a las negociaciones, porque el mediador trata directamente con quienes tienen el poder real.*

*Los contactos con los dirigentes de los partidos políticos y de las principales organizaciones populares y con los representantes de las iglesias durante sus visitas a San Salvador conforman otro aspecto de esta nueva modalidad en la conducción de las negociaciones. En estos encuentros, el mediador pulsa la opinión de los partidos, de las organizaciones y de las iglesias, la cual, después, tiene en cuenta en la mesa de negociación. De esta forma, todos ellos participan indirectamente en el proceso, ya que el gobierno de ARENA no ha aceptado aún darles la participación directa que ambas partes acordaron en Ginebra. Aunque limitada, esta participación es importante porque canaliza las opiniones e inquietudes de estos importantes sectores sociales.*

*Para discutir con más libertad y no entorpecer la dinámica del progreso de las negociaciones, las partes se comprometieron a no dar de-*

**Los principales obstáculos para la paz han surgido porque no ha habido voluntad política para resolver los problemas más graves del país y porque Estados Unidos no ha apoyado decididamente el proceso.**

*claraciones a la prensa; solamente el mediador está autorizado a informar sobre la marcha del proceso. Hasta ahora, ambas partes han mantenido con bastante seriedad este compromiso de confidencialidad, evitando propagandizar y manipular las posiciones contrarias en la mesa. Dada la complejidad del proceso, la confidencialidad ha jugado un papel positivo al permitir un ambiente de mayor libertad y seriedad en la mesa de negociación, pues cada una de las partes sólo tiene como interlocutor a la otra parte. Este ambiente no se logra con facilidad cuando se discuten temas complicados y cuando se sabe que además de la parte contraria hay que hablar teniendo delante a la prensa y a la opinión pública.*

*Es cierto que al llevar el proceso confidencialmente quienes estamos fuera permanecemos más o menos en la oscuridad, pues desconocemos cuáles son las posturas de las partes en la mesa, es decir, no sabemos exactamente si avanzan o retroceden, si enfrentan o evaden los temas de la agenda. En este sentido, la confidencialidad imposibilita confirmar las limitadas y cuidadas afirmaciones que las partes hacen después de cada encuentro, las cuales muy probablemente son propagandísticas. Esto último se nota más desde el comienzo de la campaña electoral y sobre todo de parte del gobierno de ARENA, cuyos voceros han estado insistiendo en que se han hecho avances muy importantes en la negociación y que la paz se firmará muy pronto.*

*Por otro lado, la confidencialidad también genera sospechas fundadas por los posibles compromisos que las partes pudieran acordar en la mesa, pero que serían muy discutibles o inaceptables para las fuerzas sociales del país. No debemos olvidar que ninguna de las dos partes representa necesariamente los intereses de las mayorías populares. Ambas partes negocian cuotas de poder y ello tiene el peligro de relegar los intereses más caros de las mayorías populares. Lo que militarmente puede ser aceptable para las partes no lo es necesariamente para la mayoría de los salvadoreños. Por eso, algunas organizaciones populares están exigiendo participar directamente en la mesa, para velar y defender sus intereses. No obstante estos aspectos negativos, la confidencialidad, hasta ahora, parece haber generado más bienes que males; también hay que reconocer que la exclusión de los partidos políticos y de las organizaciones populares ha sido compensada de alguna manera por los contactos personales del mediador.*

*El perfeccionamiento de los procedimientos y su uso correcto han*

*mantenido la continuidad de la negociación, pese a las dificultades internas y externas. Todo esto debe ser reconocido como mérito del mediador. Sin embargo, también hay que reconocer la existencia de un límite importante. El recurso a unos determinados procedimientos no resolverá por sí mismo los graves problemas que deben discutirse y resolverse en la mesa de negociación. No debe subestimarse superficialmente la magnitud de estos problemas, pues ahí se encuentra el origen de la guerra. Además de procedimientos expeditos y de su uso adecuado hace falta voluntad política y esto es, precisamente, lo que parece faltar para avanzar sustantivamente.*

*El papel de las fuerzas sociales y políticas del país en favor del proceso de diálogo y negociación ha sido notable. En parte, a los esfuerzos de la comisión interpartidaria se debe que ARENA haya reanudado los contactos con el FMLN, en septiembre de 1989. Las fuerzas sociales aglutinadas en la intergremial también han hecho esfuerzos importantes para ampliar el consenso de la sociedad civil sobre la necesidad y la racionalidad de la solución negociada. Gracias a estos esfuerzos, el consenso sobre la necesidad y la legitimidad del diálogo-negociación ha experimentado grandes avances. Incluso algunos altos oficiales de la Fuerza Armada hablan abiertamente de la necesidad de encontrar una salida negociada al conflicto, porque la solución militar no es viable.*

*El apoyo del gobierno de Washington a las negociaciones ha sido otra novedad del proceso, aunque aún no está muy claro hasta dónde está decidido a respaldar un proceso de negociación serio que no controla directamente. Aparentemente, el gobierno de Washington tiene una serie de razones para no estar ya interesado en mantener el conflicto salvadoreño. En primer lugar, los cambios de Europa del este han dejado sin pretexto a quienes utilizaron al llamado expansionismo soviético para justificar la guerra en El Salvador. En nuestro país ya no es necesario librar ninguna batalla decisiva contra el comunismo ni tampoco es necesario demostrar la determinación estadounidense derrotándolo militarmente, como hasta hace muy poco lo proclamaron beligerantemente los funcionarios de Washington.*

*En segundo lugar, el nuevo proyecto de "Las Américas" del presidente Bush, cuyo objetivo es convertir a todo el continente en un inmenso mercado libre para revitalizar la economía estadounidense y evitar la recesión económica que se le viene encima, ya no necesita tanto ni de los militares ni de las guerras; al contrario, ambas cosas son un obstáculo para este vasto proyecto estadounidense. El nuevo proyecto demanda democracias formales de corte neoliberal que faciliten la expansión comercial de las multinacionales estadounidenses. La continuación de la guerra en El Salvador no interesa a este nuevo proyecto.*

*En tercer lugar, a los arquitectos de la política exterior de Washing-*



ton sólo les faltaría pacificar El Salvador, el único país centroamericano donde aún tiene lugar una guerra civil. Según ellos, la correlación regional de fuerzas favorecería una pacificación de El Salvador, cuyo resultado final sería contrario a los intereses del FMLN, el cual se encontraría cada vez más aislado de sus aliados tradicionales de Cuba y Nicaragua.

Por último, parece que los funcionarios estadounidenses también se han percatado que el conflicto salvadoreño no tiene salida militar y que, por lo tanto, la única solución razonable debe buscarse por la vía de la negociación. Por todas estas razones, Estados Unidos estaría interesado en poner fin cuanto antes al conflicto salvadoreño, pero al mismo tiempo intenta, como es natural, sacar las máximas ventajas de la negociación.

Otra novedad del proceso de negociación ha sido la postura del ejército y del gobierno nicaragüenses ante el FMLN. El caso de los misiles, sustraídos por algunos oficiales del arsenal del ejército nicaragüense y entregados al FMLN, ha puesto de manifiesto la nueva correlación de fuerzas mundial y regional. La distensión de la dos grandes potencias ha llevado a la Unión Soviética a hacerse cargo de los misiles que aparecieron en manos del FMLN, los cuales habían sido entregados oficialmente a los nicaragüenses. Estos respondieron rápidamente, reconociendo que los misiles pertenecían a su arsenal y buscaron a los responsables. A su vez, presionaron al FMLN para que devolviera los misiles que aún tenía en su poder. Este incidente ha cerrado la puerta más próxima a nuevos suministros de armas al FMLN a través de Nicaragua. Pero también ha demostrado que tanto el ejército nicaragüense como el FMLN son capaces de asumir responsablemente sus compromisos políticos. De esta manera, ambas instituciones han dado un claro

mentís a sus destructores tradicionales.

## **2. Las principales dificultades del proceso de diálogo-negociación**

*El gobierno del presidente Cristiani, desde el primer momento, se ha mostrado muy optimista sobre la posibilidad de acordar un cese del fuego y de poner fin a la guerra rápidamente. Estas declaraciones no están de acuerdo, sin embargo, con sus posiciones en la mesa de negociación. Con este optimismo fácil, el gobierno quiere presentarse como amante de la paz, lo cual le es útil internacionalmente y de cara a las próximas elecciones; al mismo tiempo, culpa al FMLN de todas las dificultades del proceso de negociación y de la ausencia de resultados positivos. Por eso, conviene analizar con cuidado los principales obstáculos que ha encontrado el proceso de negociación, los cuales, además, coinciden con los problemas más graves del país.*

### **2.1. La falta de voluntad política y de colaboración**

*La paz negociada es posible si hay suficiente voluntad política para resolver los problemas principales y si el gobierno de Washington se suma seriamente a este esfuerzo. Los principales obstáculos para la paz han provenído, precisamente, de aquí, porque no ha habido voluntad política para resolver los problemas más graves del país y porque Estados Unidos no ha apoyado decididamente el proceso. Así lo reconoció el mismo secretario general de las Naciones Unidas en su informe al Consejo de Seguridad.*

*Esta falta de voluntad política está manifiesta en los renovados intentos del gobierno de Cristiani para alterar el acuerdo de Ginebra, en el cual claramente se estableció que el proceso de negociación tendría dos fases. Según este primer acuerdo básico, la primera fase debe culminar con una amplia serie de acuerdos que llevarán al cese del fuego. La agenda para llegar a estos acuerdos comprende a la Fuerza Armada, los derechos humanos, los sistemas electoral y judicial, las reformas constitucionales, económica y social, y la verificación por parte de las Naciones Unidas. En Ginebra, el gobierno salvadoreño y el FMLN acordaron unequivocamente que el cese del fuego debe entrar en vigencia sólo después que hayan alcanzado los acuerdos antes indicados. La segunda fase del proceso de negociación comenzará cuando las Naciones Unidas verifiquen el cese del fuego y su objetivo será establecer las garantías y las condiciones necesarias para reintegrar a los miembros del FMLN dentro de la vida civil, política e institucional del país.*

*El gobierno salvadoreño ha querido alterar este orden en repetidas ocasiones. Prácticamente desde el principio de la actual fase del proceso de negociación ha estado insistiendo en un cese del fuego inmediato. El gobierno primero quiere ver al FMLN desmovilizado para luego dis-*

**Ni el gobierno del presidente Cristiani ni el de Washington  
están dispuestos a asumir la negociación  
en los términos planteados.**

*cutir sus propuestas sobre el reordenamiento del país. El mismo presidente Cristiani ha puesto en juego su prestigio personal al pedir, el 1 de octubre, ante la asamblea general de las Naciones Unidas, un insólito cese del fuego unilateral, pero implementado bilateralmente. En términos generales, esta es la misma propuesta que el ex presidente Duarte repitió incansable e inútilmente.*

*Aparentemente, el gobierno espera que una vez desmovilizado, el FMLN ya no tendrá la misma fuerza para presentar sus reclamos en la mesa de negociación; es claro que ningún gobierno salvadoreño estaría dispuesto a escuchar las demandas de un FMLN debilitado. Con esto, el gobierno de Cristiani estaría tratando de repetir el proceso de desmovilización de los contras nicaragüenses, quienes fueron desarmados y desmovilizados en medio de promesas de concesiones políticas y sociales que no se han realizado completamente. Sin embargo, hay una diferencia fundamental, los contras, al final, sufrieron importantes derrotas militares y políticas; cosa que aún no le ha ocurrido al FMLN. Como es natural, el FMLN ha mantenido que el cese del fuego sólo puede ser resultado de los acuerdos políticos previos, en los cuales la democratización asentará sus bases.*

*El presunto optimismo gubernamental sobre un cese del fuego inmediato obedece a maniobras para obtener ventajas en la mesa de negociación. Todo parece indicar que el gobierno salvadoreño pretende llegar al cese del fuego sin hacer concesiones políticas importantes. De hecho, el gobierno aún no ha hecho ninguna concesión relevante que aligere las tensiones sociales y políticas del país. El gobierno del presidente Cristiani primero anunció que el cese del fuego sería alcanzado el 15 de septiembre; al llegar a la fecha sin acuerdo, se lamentó y acusó al FMLN de intolerante e inflexible. Ahora, durante la campaña electoral ha estado insistiendo diplomática y propagandísticamente en que las negociaciones han avanzado lo suficiente como para firmar un cese del fuego antes de las elecciones del 10 de marzo próximo.*

*Pero en la mesa de negociación, la postura de la delegación gubernamental ha sido inflexible y ha retrocedido a posiciones supuestamente superadas sobre el mecanismo para depurar a la Fuerza Armada, concretamente, sobre la comisión que deberá llevar a cabo esta tarea tan delicada; sobre la forma para tratar la impunidad, sobre la negociación del mismo cese del fuego y sobre los mecanismos para hacer la reforma constitucional.*

*Es sumamente revelador que el gobierno de Washington también*

*haya estado promoviendo esta postura del gobierno salvadoreño que contradice claramente el acuerdo de Ginebra y que también entorpece la labor del mediador que se atiene a él. A comienzos de enero de este año, Estados Unidos consiguió que el ministro del exterior de la Unión Soviética firmara una carta junto con su homólogo estadounidense, pidiendo al secretario general de las Naciones Unidas un cese del fuego antes de las próximas elecciones. Más recientemente, el gobierno de Washington ha intentado socavar el papel del mediador filtrando a la prensa fuertes críticas contra su actuación. Para estos funcionarios, refugiados en el anonimato, el mediador no debió haber aceptado la propuesta del FMLN sobre la disolución de la Fuerza Armada, lo consideraran poco enérgico y que acepta fácilmente las tácticas dilatorias del FMLN; es decir, estos funcionarios quisieran que el mediador presionara para conseguir cuanto antes el cese del fuego. Prescindiendo de si ésta es o no la posición oficial del gobierno de Washington, está clara la mentalidad de los funcionarios del gobierno de Bush. Una mentalidad que quiere poner fin al conflicto, pero sin hacer concesiones importantes.*

*Los presidentes centroamericanos se han dejado arrastrar por esta postura, participando así de la ofensiva diplomática del gobierno salvadoreño que busca ganar un terreno en el cual el FMLN se ha movido hasta ahora con gran facilidad. Así, lo que puede ser un importante instrumento político para favorecer la paz se ha convertido en un arma regional para cerrar espacios políticos al FMLN. En efecto, el llamado anexo de la declaración de Puntarenas, en vez de aportar al proceso de negociación, tiende a entorpecerlo y a minar la mediación de las Naciones Unidas. Los presidentes centroamericanos han puesto en peligro su credibilidad y seriedad al aceptar ingenuamente, con un lenguaje más propio de la guerra psicológica que de estadistas, la postura del presidente Cristiani.*

*Lamentablemente, los mandatarios no se quedaron a nivel de declaración, sino que anunciaron acciones diplomáticas para cortar las relaciones del FMLN en el exterior y se autoproclamaron observadores y promotores del proceso de diálogo-negociación, olvidando la existencia de un mediador con respaldo internacional y que para hacerse presentes en el proceso es necesario contar con la aceptación de las dos partes y no sólo con una. Obviamente, el FMLN rechazó semejantes pretensiones de los presidentes centroamericanos. Y no puede ser de otra manera, porque acceder a estas pretensiones de los presidentes centroamericanos significaría dejar de lado la mediación de las Naciones Unidas y trasladar el proceso a un ámbito dominado por Estados Unidos.*

*Ni el gobierno del presidente Cristiani ni el de Washington están*



*dispuestos a asumir la negociación en los términos planteados. Querrían terminar con la guerra, pero sin poner los fundamentos para la paz, es decir, sin tocar a la Fuerza Armada, sin respetar ni garantizar los derechos humanos y sin hacer reformas. Para ello creen contar con una correlación de fuerzas internacional y nacional que evolucionará favorablemente a sus planes y contraria a los del FMLN. Internacionalmente, una victoria fácil en el Golfo Pérsico estimularía la línea militarista dura y la prepotencia imperialista. Regionalmente, el Ejército Popular Sandinista se habría alejado del FMLN lo suficiente como para no permitir el paso de armas y pertrechos por territorio nicaragüense. A todo esto, se sumaría la victoria electoral de ARENA que, de alguna manera, revertiría la negociación. La combinación de todos estos factores aislaría al FMLN, poniéndolo a la defensiva, y cerraría el espacio político para la negociación.*

*Quizás también al FMLN puede atribuírsele falta de voluntad política para resolver el conflicto al mantener e intensificar su actividad militar. De hecho, para el FMLN, la presión militar es esencial y recurre a ella cuando considera que las negociaciones se han estancado y que es necesario hacerlas avanzar. Frente a la inflexibilidad de la Fuerza Armada y del gobierno, el FMLN lanzó su última ofensiva, demostrando sus importantes avances militares y la eficacia de armas sofisticadas, como los misiles. Sin embargo, hay que reconocer que el FMLN ha aprendido de sus errores pasados. Esta vez la ofensiva tuvo un carácter limitado al atacar exclusivamente objetivos militares y no buscar la protección de la población civil, como lo hizo en 1989, cuando esperaba que se produjera una insurrección. De momento, parece que el FMLN ha abandonado la hipótesis de una insurrección popular.*

*Esta campaña reafirmó, una vez más, la capacidad del FMLN para tomar la iniciativa militar, sorprendiendo a la Fuerza Armada, la cual fue forzada a hacer despliegues extraordinarios para contrarrestar la campaña insurgente. Por otro lado, el FMLN le dio a la dinámica de la guerra un nuevo giro al usar eficazmente los misiles que venía anunciando que tenía. Aunque restringió el uso de este nuevo armamento a sus zonas de control, logró mantener en tierra las aeronaves de la fuerza aérea, la cual, al no asistir a las tropas de tierra, limitó considerablemente la capacidad militar de la Fuerza Armada y afectó seriamente su moral de combate.*

*El ejército y el gobierno salvadoreño han interpretado estas acciones militares como falta de voluntad política del FMLN para negociar, pero, en realidad, mientras no se avance en la mesa de negociación, será necesario seguir recurriendo a la presión militar. La negociación se está llevando a cabo en tiempo de guerra y, precisamente, una de las cosas que busca es ponerle fin. La objetividad obliga a reconocer que*

*la Fuerza Armada, por su parte, no ha alterado el ritmo de sus operaciones militares; amparada en presuntos deberes constitucionales ha mantenido el curso de la guerra inalterado y si no ha hecho más ha sido porque el FMLN no se lo ha permitido.*

## **2.2. El futuro de la Fuerza Armada**

*La falta de voluntad política y de colaboración también se ha notado en la discusión del futuro de la Fuerza Armada, que es el primer punto de la agenda de los acuerdos políticos necesarios para llegar al cese del fuego. Según el informe del secretario general antes mencionado "se ha tropezado con considerables problemas para llegar a un acuerdo sobre las fuerzas armadas, que es la cuestión más compleja y delicada del temario. Habida cuenta de que esta cuestión afecta a todas las demás, no ha sido posible hacer adelantos sustantivos en estas últimas".*

*Quienes proponen llegar al cese del fuego sin resolver este tema crucial primero, están queriendo poner fin a la guerra conservando las mismas estructuras que le dieron origen. En esto, la Fuerza Armada tiene una gran responsabilidad por no haber tolerado el establecimiento de la democracia. Hay tres hechos criminales recientes que recuerdan con toda su crudeza la imposibilidad no sólo de la democracia, sino incluso de la convivencia, con un ejército como el actual. El primer hecho criminal es la masacre de la UCA y la falta de colaboración de los militares en su investigación y sus falsedades y contradicciones en el juzgado. Los fiscales específicos del caso se vieron forzados a renunciar ante la obstrucción de los militares, quienes no quieren que el caso sea investigado completamente para proteger a los autores intelectuales de dicha masacre. En cambio, éstos no se han cansado de repetir que el caso va bien; juicio que la fiscalía general ha aceptado candorosamente.*

*El segundo hecho criminal es otra masacre, la de El Zapote (Ayutuxtepeque), donde quince campesinos fueron asesinados a sangre fría por un contingente de soldados aparentemente de la Primera Brigada de Infantería. De nuevo, nos vemos confrontados con una bárbara masacre de campesinos indefensos y con las conocidas estructuras de impunidad para proteger a los responsables. Los sobrevivientes que se han atrevido a señalar al ejército como responsable han sido a su vez acusados y maltratados por las instancias gubernamentales, que, por su naturaleza, deberían mostrarse satisfechas de las declaraciones de estos testigos y deberían proceder a investigar en la dirección hacia la cual apuntan sus testimonios. Se exigen pruebas, pero como éstas no gustan, se mira para otro lado para no enfrentar a los asesinos directamente. Hasta el mismo poder ejecutivo ha tomado parte, tratando de demostrar*

*lo indemostrable, minando aún más la poca credibilidad que ya tiene.*

*El tercer hecho criminal ha sido la destrucción parcial del Diario Latino. En este caso, la mano criminal parece ser la misma que ha actuado en casos similares. En los últimos años, dos periódicos han sido destruidos por mano criminal; a mediados de 1989, la misma imprenta de la UCA fue víctima de un atentado dinamitero. El ataque contra el Diario Latino es un hecho criminal contra la libertad de expresión — precedido de la detención temporal de algunos periodistas y de la requisición de su material por un comandante militar de oriente— es un grave retroceso para el proceso democrático en el cual supuestamente*



*nos encontramos. El pecado capital del Diario Latino ha sido su libertad e independencia para tratar los principales problemas nacionales con pluralismo y fidelidad a las fuentes, cosa que los otros medios escritos, que tanto se precian de la libertad de prensa, no hacen. Este atentado criminal ha demostrado que aún no estamos preparados para tolerar la libertad de expresión. Es paradójico que los grandes medios de comunicación y sus asociaciones, que hace apenas unas pocas semanas, en nombre de esa misma libertad, lanzaron una agresiva campaña contra una propuesta de reforma del Código Electoral que regularía el uso de la propaganda política, no hayan levantado su voz de protesta con igual o más fuerza. Todavía ha sido más sorprendente que algunos funcionarios gubernamentales hayan repetido viejas explicaciones (la del autoatentado o la de la investigación exhaustiva) increíbles por sabidas.*

*El gobierno del presidente Cristiani y la Fuerza Armada, aparte de tolerar culposamente, estos actos criminales, están cometiendo otro lamentable error al querer silenciar las denuncias que señalan a miembros del ejército como responsables de estos crímenes. Es comprensible que les molesten estas acusaciones y las consecuentes exigencias de depuración y estructuración de la Fuerza Armada —ellos prefieren hablar de profesionalización, con lo cual quieren decir que las actuales estructuras militares deben conservarse con algunas modernizaciones. Sin embargo, la única forma para hacer desaparecer esas molestas acusaciones y esas exigencias sería investigando rápida y eficazmente esta clase de crímenes y entregando a sus responsables, incluidos los autores intelectuales, a la justicia. Erradicado el mal, desaparecerá el malestar. Es absurdo que pretendan seguir actuando como lo han estado haciendo hasta ahora y que no haya protestas ni denuncias.*

*Si el mismo ejército hubiera tomado la iniciativa, es decir, si hubiera entrado en un proceso de revisión a fondo de su manera de proceder y de su mentalidad, si estuviera dispuesto a colaborar en la investigación del caso de los jesuitas, si hubiera impedido la masacre de El Zapote y el atentado contra el Diario Latino, o si entregara a la justicia a los responsables, la paz sería ya un hecho. La persistencia de esta tradición de crímenes e impunidad y la negativa del ejército a modificarla no pueden interpretarse sino como falta grave de voluntad política para resolver el conflicto. Esta falta de visión democrática de los militares ha llevado a los más radicales a pedir la disolución del ejército. Es muy de tomar en consideración que, en la última encuesta del IUDOP, el 48 por ciento esté de acuerdo en la desaparición de los dos ejércitos.*

*Estos hechos criminales han demostrado la importancia de la reestructuración y depuración de la Fuerza Armada para el futuro de la democracia en nuestro país. Es curioso que así como algunos altos ofi-*

**En esto, la Fuerza Armada tiene una gran responsabilidad por no haber tolerado el establecimiento de la democracia.**

*ciales del ejército parecen estar convencidos de que es imposible resolver el conflicto militarmente, aún no lo están de que la democracia pasa por la depuración de la Fuerza Armada. Estos militares, si bien están a favor de la negociación, por lo menos a nivel de declaración, todavía no están dispuestos a aceptar la necesidad de hacer reformas profundas. El mismo presidente Cristiani justificó la existencia de los escuadrones de la muerte como respuesta al FMLN. De hecho, lo único que han aceptado ha sido trasladar al servicio exterior, como agregados militares, a aquellos oficiales con muy mala reputación.*

*El FMLN sólo podrá entrar en el esquema democrático, abandonando las armas y poniendo fin a la existencia de dos ejércitos, si la Fuerza Armada es reestructurada radicalmente. Una reestructuración que es difícil llevar a cabo en breve tiempo, pues es necesario cambiar su manera de proceder y su mentalidad. Sin embargo, la dificultad para cambiar no debe ser pretexto para seguir escamoteando algo que es ineludible para fundar sólidamente la democracia.*

*La mentalidad que ha predominado en la Fuerza Armada ha sido la propia de la guerra sucia, tan en boga hace algunos años gracias a las enseñanzas de los asesores estadounidenses. Las necesidades de esa guerra sucia llevaron a crear estructuras informales o paralelas dentro de la Fuerza Armada, como los escuadrones de la muerte y las llamadas defensas civiles. Parte de esta mentalidad es que el ejército puede actuar prescindiendo de las leyes del país. Por otro lado, para proteger a sus miembros, creó una estructura de impunidad que ha funcionado eficazmente con la complicidad de todo el Estado, independientemente de las ideologías de los partidos políticos que han controlado sus órganos de gobierno. Esta mentalidad no tolera la oposición; quienes no la apoyan ni la defienden son enemigos, o en fórmula ya acuñada por los voceros militares, delincuentes terroristas o fachadas, que deben ser reprimidos o eliminados.*

*Ninguna democracia puede funcionar con semejante mentalidad militar. Con esta manera maniquea de ver la sociedad, el ejército ha asesinado impunemente, en nombre de la patria, y a veces también en nombre de Dios, a varias decenas de miles de salvadoreños. Esta mentalidad es incompatible con los derechos civiles y políticos. Por eso no es extraño que muchos oficiales militares hayan sido acusados de violar los derechos humanos de manera sistemática; asimismo, es muy comprensible, desde esta perspectiva, que las estructuras estatales protejan, e incluso premien, a estos servidores incondicionales. Esta mentalidad*

*debe desaparecer y ser reemplazada por otra, en la cual el deber del ejército sea garantizar y proteger la vida de todos los ciudadanos, prescindiendo de sus ideas y de sus afiliaciones políticas.*

*En este sentido, las pláticas sobre derechos humanos que periódicamente se dictan en los cuarteles tienen un efecto muy limitado, mientras no cambie la concepción misma de la constitución y de los fines del ejército. Para acabar con esta mentalidad tan nefasta hay que dar un paso doloroso, pero ineludible. La sociedad entera debe retomar y enfrentar las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Este sucio y doloroso pasado no puede olvidarse, como si nunca hubiera existido. La sociedad salvadoreña tiene el derecho y el deber de saber lo que ha pasado en la década pasada, justamente, para que haciendo consciente el horror de la guerra sucia no vuelva a permitir caer en semejantes irracionalidades.*

*Los familiares de los desaparecidos tienen derecho a saber dónde están sus parientes y quiénes fueron responsables de sus desapariciones forzadas. Esta exigencia no obedece a un deseo de venganza, sino al derecho de saber la verdad para fundar sobre ella la sociedad del futuro. Lo importante es sacar a la luz pública esas violaciones y aceptarlas socialmente en toda su crudeza. Los responsables deben responder de sus crímenes ante la justicia. Una vez que hayan sido sentenciados, si son hallados culpables, podrían ser beneficiados con una amnistía. Para los culpables difícilmente habrá peor castigo que vivir teniendo delante las violaciones de los derechos de las cuales son responsables.*

*Este es un punto que debe ser discutido con mucho cuidado en la mesa de negociación; las partes no pueden transar, olvidando este oscuro pasado. Los olvidos históricos de los pueblos son peligrosos, porque fácilmente se vuelve a los mismos caminos ya recorridos inútilmente. De la negociación debe salir un mecanismo eficaz para investigar la verdad de lo ocurrido en la década pasada y para tratar humana, pero firmemente a los responsables. Las fuerzas sociales del país no deben permitir que este aspecto tan fundamental para el futuro se escape en nombre de falsas reconciliaciones.*

*La política estadounidense respecto a la Fuerza Armada tampoco ha permitido avanzar en el proceso de negociación. El secretario general de las Naciones Unidas ha dicho estar persuadido de que si contara con el "apoyo de las potencias exteriores que están en condiciones de ayudarme en mis esfuerzos, podría alcanzarse la meta de establecer la paz en El Salvador en un futuro no muy distante" (informe al Consejo de Seguridad, 21 de diciembre de 1990). El pequeño gesto de congelar la ayuda militar estadounidense del año fiscal de 1991 duró poco*

*tiempo. De hecho, ya habían encontrado pretextos y formas para mantener inalterado el nivel de dicha asistencia al ejército salvadoreño, el cual, así, pudo reemplazar el equipo destruido durante la ofensiva de fin de año del FMLN, en especial las aeronaves. El asesinato de los dos oficiales estadounidenses que cayeron en Lolotique les proporcionó la excusa que estaban buscando para restablecer la ayuda militar congelada, aunque aún la retendrán durante sesenta días, esperando que en ese lapso se alcance el cese del fuego y, entonces, ya no sería necesario desembolsarla. Sin embargo, la señal ha sido clara para los militares salvadoreños. El gobierno de Washington los sigue apoyando incondicionalmente y acepta la forma como conducen la guerra. Aparte de que también los sigue protegiendo al no entregar a la justicia los documentos que tiene sobre el caso de la UCA.*

### **2.3. El respeto y la garantía de los derechos humanos**

*Cuando la negociación comenzó a estancarse en el tema de la Fuerza Armada, el mediador logró la aprobación de un documento sobre derechos humanos, el llamado acuerdo de San José, que hasta ahora es el único acuerdo concreto que las partes han firmado, aparte de los otros sobre el contexto, la agenda y el calendario de la negociación. En este primer acuerdo sustancial, firmado en octubre, las partes se comprometieron a establecer mecanismos concretos para respetar y garantizar los derechos civiles y políticos de los salvadoreños.*

*Ya en el acuerdo firmado en Ginebra (en abril), la búsqueda del irrestricto respeto de los derechos humanos aparece como punto básico de las negociaciones. En Caracas, el tema de los derechos humanos ocupa el segundo lugar de la agenda, siendo el primero la Fuerza Armada. Así, pues, la importancia dada a los derechos humanos en los documentos que han salido del proceso de negociación ha abierto una nueva perspectiva histórica, al menos a nivel de declaraciones y compromisos sobre el papel.*

*Hasta ahora, se ha tratado, en efecto, de declaraciones y compromisos sobre el papel, porque las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario han persistido; sólo en los meses de agosto y septiembre de 1990 se registró un descenso notable en algunas categorías de violaciones. Por lo demás, no ha habido una mejoría que corresponda a las declaraciones y a los compromisos adquiridos en el proceso de negociación. Aunque las dos partes han cometido violaciones condenables, los datos siguen demostrando que el principal violador sigue siendo la Fuerza Armada y sus organismos paralelos.*

*Aún no se han desterrado las masacres de la realidad salvadoreña. A comienzos del año pasado, en Guancorita —comunidad Ignacio*

*Ellacurta—, la fuerza aérea bombardeó y ametralló el caserío, dejando cinco muertos y diecisiete heridos, en su mayoría niños. No obstante que el caso está bien documentado, el gobierno no ha hecho ninguna investigación para establecer responsabilidades ni ha indemnizado a las víctimas, tal como lo prometió. Un año después, otra masacre, la de El Zapote, ha marcado este ciclo de violaciones de los derechos humanos. La actuación arbitraria de los grupos paramilitares y su impunidad trascendió las fronteras nacionales al caer asesinado en Guatemala Héctor Oquell Colindres. Al igual que en muchos otros casos, las autoridades salvadoreñas no han prestado atención al caso para esclarecerlo.*

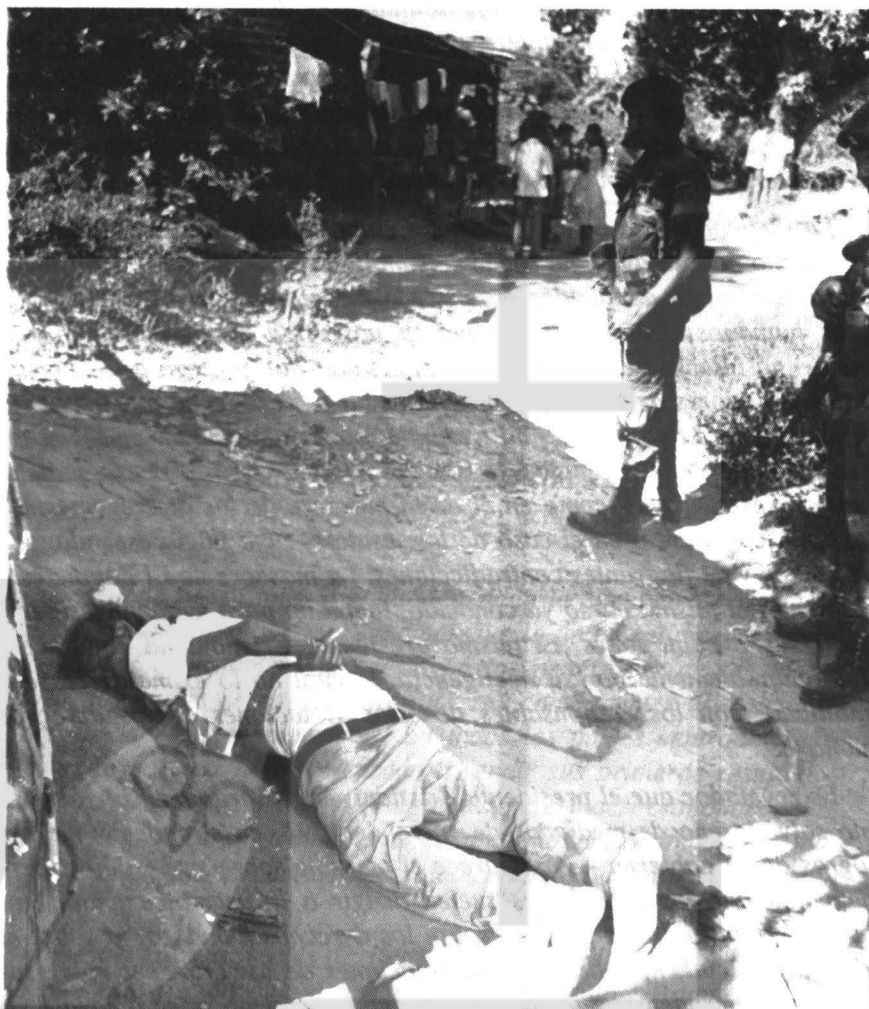
*Las capturas de los dirigentes sindicales han seguido produciéndose como otro mecanismo de control y represión contra el derecho y la libertad de organización laboral. A estas violaciones deben añadirse las capturas de muchas personas consideradas sospechosas de pertenecer al FMLN, quienes fueron remitidas a los centros penales como reos políticos o fueron puestas en libertad después de haber sido detenidas y sometidas a interrogatorios injustificados. En muchos de estos casos se ha denunciado la aplicación de diversas torturas.*

*Las actividades de los escuadrones de la muerte también han persistido; varias de sus víctimas aparecieron abandonadas a la orilla de las carreteras y autopistas. Estas actividades aumentaron en los meses de junio y julio, al aproximarse una de las rondas de negociación.*

*Los atropellos a que han sido sometidos sistemáticamente los repatriados y repobladores de todo el país, particularmente los de Morazán y los recién llegados de Honduras, quienes fundaron la Ciudad Segundo Montes, constituyen otro capítulo dramático de violaciones de los derechos humanos. El ejército ha sometido a estos salvadoreños a hostigamientos constantes, ha impedido el paso de alimentos, provisiones, material de construcción y visitantes nacionales y extranjeros, ha capturado a los miembros de las comunidades y a éstas las ha sometido a constantes operativos militares. El calvario por el cual han tenido que pasar los habitantes de Ciudad Romero (Panamá) para regresar a El Salvador es una triste manifestación de la hostilidad del gobierno hacia estos sectores, a quienes, asumiendo la tesis de la Fuerza Armada, los considera simpatizantes del FMLN y, por lo tanto, ciudadanos de segunda categoría.*

*El FMLN también ha recurrido al terrorismo, aportando su cuota de violencia irracional, al usar un coche-bomba en Santa Tecla a comienzos de 1990, al volver a usar aparatos de poca precisión en un ataque contra el Estado Mayor en octubre y al asesinar a los dos oficiales estadounidenses que cayeron junto con su helicóptero.*





*Con todo, sin embargo, la peor amenaza contra los derechos humanos es la continuación de la guerra, pues de esta forma la población civil está expuesta constantemente a ser víctima de los enfrentamientos, de los artefactos explosivos "abandonados" y de los desquiciamientos producidos por la militarización de la sociedad. Ninguna de las dos partes en conflicto se ha visto libre de violaciones de las normas del derecho internacional humanitario, aunque hay que reconocer que la ofensiva militar del FMLN de noviembre y diciembre del año pasado y la respuesta de la Fuerza Armada no tuvieron, para la población civil, las mismas consecuencias negativas que la de 1989. La Fuerza Armada, sin embargo, volvió a reaccionar cateando las sedes de algunos organismos humanitarios y populares.*

*Es claro que las peores violaciones de los derechos humanos siguen ocurriendo en este contexto de prolongación de la guerra. El asesinato*

*de los dos oficiales militares estadounidenses debe considerarse desde esta perspectiva. Si no hubiera guerra, y en ello el gobierno de Washington tiene una enorme responsabilidad, no se produjeran asesinatos como éstos y como muchos otros que no preocupan tanto a los funcionarios estadounidenses. Aparte que aún no han aclarado por qué su helicóptero volaba tan bajo en una zona conflictiva.*

*La ineficacia y la condescendencia culpable del sistema judicial con el ejército no han ayudado a que se cumplan las declaraciones hechas y los compromisos adquiridos en orden a respetar y garantizar los derechos humanos; sobre todo porque su pasividad ha permitido que se mantenga intacta la estructura de impunidad que protege a los principales violadores de tales derechos. A lo largo del año se mantuvo consistentemente la norma de no investigar estas violaciones y en los casos excepcionales en los cuales se vio obligado a abrir proceso judicial hubo reveses graves, como en el de la masacre de los diez campesinos de San Sebastián, o en el caso de los jesuitas, cuyo juicio está plagado de vacíos y de flagrantes contradicciones. La masacre de El Zapote está siguiendo el mismo curso ya conocido, todo ello para evitar investigar y pedir responsabilidades. El mismo presidente Cristiani ha condescendido culpablemente por su negligencia, la cual no lo exime de responsabilidad, con los responsables de estas violaciones de los derechos humanos.*

*Es revelador que el presidente Cristiani, en su largo mensaje al pueblo salvadoreño de mediados de enero de 1991, en el cual detalla los logros de su gobierno —casi parece el mensaje sobre su gestión gubernamental que los presidentes suelen dirigir a la asamblea anualmente—, no diga una sola palabra sobre los derechos humanos, ni sobre el sistema judicial, ni sobre las investigaciones de los crímenes más graves. Es sorprendente, y también alarmante, que el presidente haya olvidado tratar una realidad tan seria y tan grave que afecta a la mayoría de los salvadoreños.*

*Dada la tan arraigada tradición de no administrar justicia es incoherente que el gobierno ahora exiga al FMLN entregar a los culpables del asesinato de los dos oficiales militares estadounidenses.*

*En definitiva, a pesar de los acuerdos y compromisos contraídos, no se ha mejorado sustancialmente en el respeto a la vida, a la libertad, y a la integridad física y moral de la población. Así lo ha reconocido una vez más la asamblea general de las Naciones Unidas al afirmar "la*

**A pesar de los acuerdos y compromisos contraídos,  
no se ha mejorado sustancialmente en el respeto a la vida,  
a la libertad, y a la integridad física y moral de la población.**

*persistencia de las violaciones a los derechos humanos por motivos políticos... tales como ejecuciones sumarias, torturas, secuestros y desapariciones forzadas, así como el clima de intimidación que afecta a ciertos sectores de la población", por lo cual aquélla decidió mantener bajo examen la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en El Salvador un año más.*

#### **2.4. Necesidad de un modelo económico para la paz**

*En la mesa de negociación aún no se ha entrado seriamente a tratar el tema de las reformas económicas y sociales para garantizar un nivel de vida digno para la mayoría de los salvadoreños; éste es el gran tema postergado, pero no por eso es menos importante, porque si además de terminar con la guerra hay que construir la paz, ésta no será realidad sin un modelo económico y social que beneficie a las mayorías populares. No debemos olvidar que la injusticia económica y social se encuentra en la raíz de la guerra.*

*El tema tiene sus propias dificultades, dada la coyuntura económica mundial y regional. Todo parece indicar que la única salida que tienen las economías centroamericanas está en los programas de ajuste estructural, los cuales se caracterizan por sus componentes liberalizadores, privatizadores y monetaristas. En todos los países centroamericanos, estos programas han comenzado a rendir sus primeros resultados positivos al reducir los principales desequilibrios macroeconómicos. Sin embargo, la gran tarea pendiente es compaginar el crecimiento económico con la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población.*

*En nuestro caso, a finales de 1990, el gobierno de ARENA ha anunciado con satisfacción que el producto interno bruto ha aumentado el 2.8 por ciento, que el déficit fiscal se ha reducido en casi el 55 por ciento y que las exportaciones han crecido en un 18 por ciento. El resultado de la balanza de pagos ha sido positivo, debido al aumento de las exportaciones y a un elevado nivel de repatriación de capital. El gobierno del presidente Cristiani se ha jactado de haber disminuido al 19.3 por ciento el índice de precios para el consumidor, medido punto a punto, de diciembre de 1989 a diciembre de 1990.*

*Sin embargo, el gobierno ha silenciado los indicadores sociales del bienestar. Según los datos de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples, el primer año de gestión económica de ARENA ha producido más de 250 mil nuevos pobres en los sectores urbanos y ha conseguido una redistribución regresiva del ingreso, pues el 10 por ciento de los hogares de menores ingresos, esto es, "los más pobres de los pobres", vieron disminuidos sus ingresos en un 13 por ciento. Esto quiere decir que solamente se apropiaron del 1.21 por ciento del ingreso total. En*

*cambio, los ingresos del 20 por ciento de los hogares más ricos aumentaron en un 11 por ciento, apropiándose del 50.3 por ciento del ingreso total. Por otro lado, la tasa de desocupación abierta en el área urbana se incrementó en un 10 por ciento y la de subocupación alcanzó el 48.9 por ciento, mientras que el número de los cesantes aumentó en el 47.3 por ciento, pese a que la propaganda de ARENA se jacta de haber aumentado el empleo.*

*En el ámbito de las necesidades básicas, el optimismo del gobierno es contradictorio con la percepción de la mayoría de los consumidores, sobre todo con los estratos de menores ingresos. La brecha entre el salario nominal y el costo de la canasta básica se ha ampliado aún más en el último año, lo cual demuestra que el proceso inflacionario no ha sido detenido aún, tal como pretende hacer creer el gobierno. Si consideramos la tasa de variación promedio anual, el resultado es completamente distinto al que el gobierno ha presentado con tanto orgullo, es decir, el proceso inflacionario se ha acelerado en el último año.*

*Los programas para compensar los resultados del ajuste estructural y la propaganda que los acompaña no han dado resultados satisfactorios. Sin embargo, es justamente aquí donde se encuentra el punto más vulnerable de la gestión gubernamental. El gran reto político de la oposición radica en canalizar electoralmente el malestar generalizado por la política económica del gobierno de ARENA, el cual, además, no ha sido capaz de establecer el consenso necesario para que su programa de ajuste estructural pueda funcionar sin elevados costos sociales. Peor aún, el gobierno de ARENA se ha esmerado en unir en contra suya a las fuerzas sociales y políticas.*

*Cualquier gobierno futuro deberá enfrentar los mismos problemas que el gobierno actual. Las fuerzas sociales y políticas, a través de las plataformas de la intergremial y de la interpartidaria tienen la obligación de comenzar a discutir un modelo económico alternativo a partir de un consenso nacional, en el cual deben participar, por supuesto, tanto el gobierno actual como el FMLN. La tarea no es fácil, porque el modelo económico que se implante debe generar suficientes empleos e ingresos para reducir los niveles actuales de desempleo y de la desigual distribución del ingreso y porque el actual gobierno está empeñado en hacer todo lo contrario.*

*Este programa económico no facilita la tarea pendiente para crear un modelo económico que haga viable la vida de la mayoría de los salvadoreños dentro de una década. El crecimiento económico no garantiza por sí mismo que las condiciones de vida de las grandes mayorías mejoren. Es necesario fomentar la reactivación económica, estimulando los sectores poblacionales cuya demanda es estratégica, concretamente, a las mayorías populares. La experiencia de la década pasada, en la*

**El año 1990 no ha sido un año completamente perdido para la paz, pues hemos avanzado bastante, aunque no lo suficiente.**

*cual los grandes desequilibrios macroeconómicos se profundizaron y la actividad económica se deprimió, corrobora la necesidad de fomentar una reactivación desde las mayorías populares. No olvidemos que está en juego la consolidación de la paz, al finalizar la guerra. La vieja tesis del rebalse de los beneficios del crecimiento económico hacia las mayorías populares ya ha fracasado; sería social y políticamente absurdo volver por estos caminos ya trillados con tan pocos resultados.*

### **3. Las tareas pendientes**

*A lo largo de los últimos meses se ha adquirido suficiente experiencia sobre los procedimientos que facilitan el avance en la negociación. Esta experiencia debe ser aprovechada para mantener y profundizar los procedimientos que ayudan y para descartar aquellos que no facilitan el avance del proceso.*

*Sin embargo, el resultado final no depende exclusivamente de los procedimientos, sino de la voluntad política de las partes comprometidas en el proceso. En este sentido, el gobierno del presidente Cristiani, la Fuerza Armada y el gobierno de Washington tienen mucho que cambiar para hacer posible el final de la guerra y el establecimiento de la paz. Tanto el gobierno de ARENA como el ejército deben aceptar la depuración de la Fuerza Armada y el fin de la impunidad. Las persistentes y graves violaciones de los derechos humanos, así como la incapacidad y la ineptitud del sistema judicial para cumplir con sus funciones constitucionales, demuestran que algo muy importante anda mal en las instituciones más importantes de la democracia salvadoreña.*

*El gobierno de Washington también debe apoyar decididamente las gestiones del mediador de las Naciones Unidas y debe articular una política que responda a las aspiraciones del pueblo salvadoreño por la paz y la democracia. Aparentemente, Estados Unidos tiene suficientes razones de peso para terminar con la guerra salvadoreña, pero aún no ha encontrado una política que responda a esas razones. Pareciera que algunos funcionarios estadounidenses temen abandonar los esquemas que han venido utilizando durante años. Están atrapados en sus propias contradicciones, pues si bien, por un lado, quieren terminar con la guerra, por el otro, no parecen estar dispuestos a abandonar sus viejas alianzas y sus intereses creados dentro de las estructuras salvadoreñas que hay que cambiar radicalmente.*

*Las descongelación del cincuenta por ciento de la ayuda militar para el gobierno salvadoreño ha sido negativa para la paz, porque ha da-*

*do un respaldo inmerecido al ejército salvadoreño. Inmerecido porque hasta ahora no ha hecho un sólo gesto significativo para honrar los compromisos adquiridos en el acuerdo de San José sobre derechos humanos; la obstrucción de la investigación en el caso de los jesuitas, la masacre de El Zapote y la destrucción parcial del Diario Latino más bien corroboran la necesidad de ejercer una firme presión sobre los militares. En este sentido es irónico que el embajador de Estados Unidos declare que estos actos criminales impiden hablar de democracia en El Salvador y anuncie que su gobierno ayudará a la reconstrucción del periódico destruido, pero que no sepa de cuál de las dos extremas provino el ataque. Precisamente, estas actitudes tan ambiguas son las que no ayudan al proceso de negociación.*

*Aquí, de nuevo tropezamos con el problema de la impunidad de la Fuerza Armada, de la cual el gobierno estadounidense es cómplice activo, puesto que hasta ahora no ha dado ningún paso positivo para ponerle fin, no obstante las oportunidades que ya ha tenido para ello. ¿Qué teme tanto el gobierno de Washington que todavía no ha podido formular una política coherente para establecer una democracia firme en El Salvador? Más aún, los funcionarios de la embajada de Estados Unidos se saltaron todas las instancias de la justicia salvadoreña al recuperar los cadáveres de los tres oficiales que cayeron en Lolotique. Al colocarse por encima de la ley, han dado un pésimo ejemplo a sus aliados salvadoreños, quienes, precisamente, necesitan aprender a someterse a la institucionalidad y a la legalidad civil. Es curioso que los grandes defensores de la institucionalidad del país hayan contemplado en silencio esta violación de nuestras leyes. En este sentido, el FMLN, en cambio, les ha dado un buen ejemplo al investigar y pedir responsabilidades a los autores del doble asesinato.*

*Tanto al gobierno del presidente Cristiani como a la Fuerza Armada, sobre todo, pero también al FMLN, en lo que le corresponde, deben honrar los compromisos adquiridos en San José. Los que más deben hacer en esta línea de respeto a los derechos humanos son los dos primeros. En primer lugar, porque son los que más los violan; y, en segundo lugar, porque constituyen el Estado y, en consecuencia, tienen el deber y la obligación fundamental de respetar y garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Los párrafos que conforman la primera parte de este acuerdo contienen un programa de derechos humanos que es forzoso cumplir y aplicar no sólo porque las partes se han comprometido formalmente a ello, sino porque en ellos se encuentran detalladas aquellas prácticas que hacen imposible la convivencia humana entre nosotros. En estos párrafos se encuentra una propuesta integral para enfrentar definitivamente los peores fenómenos de violación de los derechos humanos. Esta propuesta es sumamente importante, porque aún no se ha erradicado ninguno de estos fenómenos; lo único que ha*

*habido es altos y bajos en el nivel de las violaciones, como los registrados en algunos meses de 1990.*

*El gobierno del presidente Cristiani y la Fuerza Armada deberían adoptar este plan integral de respeto de los derechos humanos, remediando así las deficiencias crónicas del Estado salvadoreño en cuanto al cumplimiento de sus deberes fundamentales de respeto y garantía a la vida de sus ciudadanos. La preocupación retórica del presidente Cristiani por el bienestar de los más pobres de los pobres tiene aquí un reto, que si lo asume y lo realiza, junto con el reto de mejorar su situación económico social, lo convertirían en uno de los presidentes más importantes del país.*

*El FMLN, por su parte, también debe asumir la parte que le corresponde de este programa de derechos humanos; concretamente, debería poner fin a todos los actos de terrorismo, al reclutamiento forzoso de jóvenes y a los ajusticiamientos sumarios. Nada de esto ayuda al proceso de negociación. Por otro lado, las próximas elecciones representan un reto a su madurez política. El FMLN debería respetar el proceso electoral, absteniéndose de entorpecerlo con acciones militares, que siempre han sido contraproducentes y que, por otro lado, tampoco han impedido el desarrollo de las elecciones. Existen otros mecanismos para insistir en que las elecciones no conducirán a la paz mientras no se den otras condiciones más fundamentales.*

*La misión de verificación de las Naciones Unidas, aprobada en la segunda parte del acuerdo de San José, es otra de las tareas pendientes para hacer posible la paz. Esta misión podría cambiar el futuro de El Salvador, por lo menos tiene capacidad para hacerlo si utiliza los medios y las facultades que le han sido otorgadas para esclarecer las violaciones de los derechos humanos, para denunciar y erradicar la práctica de la tortura, de las ejecuciones extrajudiciales o sumarias, y de la desaparición forzada de las personas. Asimismo cuenta con instrumentos para resolver el núcleo de las violaciones más graves, sistemáticas y persistentes, la impunidad. La existencia de esta misión es una intervención que las dos partes firmantes han aceptado, reconociendo al mismo tiempo la existencia de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la inutilidad de las instituciones estatales para evitarlas.*

*Los presidentes centroamericanos y las instancias regionales que están creando deberían ponerse al servicio de la paz no convirtiéndose en instrumentos de una de las partes, aunque ésta sea un gobierno constitucional. Las cumbres presidenciales no deben confundir los recursos legítimos de la democracia con el apoyo a un plan militar concreto. Esto vale no sólo para nuestro conflicto, sino también para el guatemalteco y para el ya crónico conflicto social nicaragüense. En este sentido, los presidentes de la región deberían preocuparse de la*

*pacificación y de la desmilitarización, comenzando por lo que no han querido enfrentar, la presencia de un ejército extranjero en el territorio centroamericano, el ejército estadounidense, el cual está físicamente presente en Honduras y Panamá, asesora la conducción de la guerra en El Salvador.*

*Está claro que el mejor modo para poner fin a la guerra es cesar de proporcionar armas a cualquiera de las dos partes enfrentadas, promoviendo, en cambio, una democracia amplia, pluralista y dialogante. En este sentido, el ejército nicaragüense ha dado una gran muestra de madurez al pedir cuentas de los misiles tomados ilegítimamente de su arsenal. Si en vez de seguir promoviendo y alimentando la guerra, el gobierno de Estados Unidos tomara el camino contrario, la paz tendría mejores posibilidades. Los presidentes centroamericanos podrían utilizar sus reuniones periódicas para establecer las condiciones de una paz negociada con justicia en toda el área.*

*Mucho queda por hacer aún en El Salvador para que la paz sea una realidad. Las tareas pendientes son complejas, pero es una obligación histórica el enfrentarlas. Los problemas planteados en la mesa de la negociación son los mismos problemas que tanto afligen al país y para resolverlos todavía hace falta mucha voluntad política. Aún existe mucha inflexibilidad en los gobiernos salvadoreño y de Washington y en la Fuerza Armada. Es inaceptable que quieran poner fin a la guerra sin resolver los graves problemas que afligen al país. El FMLN y el mismo mediador deben recurrir a toda su creatividad para superar los obstáculos planteados y para encontrar soluciones viables para la convivencia.*

*En este sentido y dada la falta de voluntad política y de colaboración, sería muy oportuno que el mediador hiciera una evaluación del proceso de negociación de cara al pueblo salvadoreño. Con la autoridad que le da la mediación debería informar objetivamente cuál es el estado del proceso y por qué no se han cumplido los plazos acordados. El pueblo salvadoreño tiene derecho a conocer de una voz autorizada qué ha pasado hasta ahora en la mesa de negociación. Este sería un buen mecanismo para complementar el carácter confidencial de la negociación. Un informe semejante, el cual debería ser proporcionado periódicamente, ejercería presión sobre las dos partes, pues las obligaría a enfrentar sus responsabilidades públicamente y a trabajar seriamente en la mesa de negociación. De lo contrario se corre el grave peligro de usar la mediación y la confidencialidad para ocultar intereses inconcesables. Esta forma de presión sobre el gobierno y el FMLN es muy necesaria ahora, cuando parece que eso es precisamente lo que hace falta para avanzar. El pueblo salvadoreño tiene derecho a saber autorizadamente el estado de la negociación para pedir responsabilidades.*



*Sabiendo lo que ha sucedido en la mesa de negociación de una voz autorizada, las fuerzas sociales del país podrían movilizarse para presionar en dirección hacia la paz con justicia. La confidencialidad ha paralizado, en algún sentido, a las fuerzas sociales, las cuales, además, no tienen acceso directo a la mesa. Ya se ha demandado suficientemente la paz y la justicia en general; ahora es tiempo de profundizar en las concreciones históricas de ambas. Por eso es necesario que el mediador informe al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional de la situación objetiva de la mesa. Esta sería otra forma, real y efectiva, para ejercer la democracia en El Salvador.*

*El año 1990 no ha sido un año completamente perdido para la paz, pues hemos avanzado bastante, aunque no lo suficiente. La paz todavía tiene posibilidades reales en nuestro país, aunque se encuentra muy amenazada por la falta de voluntad política y de colaboración de quienes no quieren hacer concesiones.*

*San Salvador, 11 de febrero de 1991.*

